



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se regula el Registro Electrónico Común, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dicho esto, el Proyecto sometido a informe tiene por objeto, tal y como se desprende de su Exposición de Motivos y de la Memoria de Impacto Normativo adjunta al mismo, la refundición y actualización de la normativa referida al Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, regulado por la Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, objeto de reforma por la Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, quedando la misma plasmada en el artículo 3 del Proyecto, y teniendo asimismo en cuenta las previsiones de la Orden HAP/1637/2012, de 12 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos. Asimismo, el Proyecto adapta la normativa ahora vigente a la nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Como cuestión previa, debe indicarse que la Orden PRE/3523/2009 fue sometida a informe de esta Agencia de fecha 17 de diciembre de 2009, en que se propusieron una serie de modificaciones que finalmente fueron incorporadas al texto de la Orden, de forma que la misma resulta conforme al parecer emitido en su momento por esta Agencia.

El Proyecto ahora sometido a informe se limita a modificar, en lo que a la aplicación de las normas de protección de datos se refiere y al margen de la modificación del órgano responsable del fichero, lo dispuesto en el Anexo III en cuanto al nivel de seguridad exigible al fichero relacionado con el Registro General, pasando ese nivel de ser el alto en el texto vigente al básico en el Proyecto.

Esta cuestión fue objeto de análisis en el informe de 17 de diciembre de 2009, en que esta Agencia consideró precisa la modificación del nivel de seguridad básico entonces propuesto por el nivel alto, dado que la reforma del



artículo 81.5 b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que había sido propuesta por esta Agencia en el informe emitido al entonces Proyecto de Real Decreto de aprobación del Esquema Nacional de Seguridad, que permitiría aplicar la regla de aplicación al tratamiento incidental de datos especialmente protegidos cuando dicho tratamiento fuera automatizado del nivel de seguridad básico aún no había sido aprobada.

Sin embargo poco después de la emisión de ese informe y de la aprobación de la Orden PRE/3523/2009, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 3/2010, de 8 enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica ya introdujo la mencionada reforma, siendo posible la aplicación de las medidas de seguridad de nivel básico a “ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesorio se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad”, sin diferenciar si dichos tratamientos son manuales o automatizados.

Quiere ello decir que la modificación planteada, tal y como indica la Memoria de Impacto Normativo del Proyecto, resulta conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, por lo que procede informar favorablemente el texto ahora sometido a parecer de esta Agencia.

No obstante se propone, desde el punto de vista de la mera redacción, una modificación en el apartado relacionado con la estructura básica del fichero en el Anexo III, reemplazando la expresión “datos relativos a la comisión de infracciones penales contra las leyes de seguridad ciudadana” por “datos relativos a la comisión de infracciones penales y administrativas”, a fin de ajustar dicha redacción a las previsiones del artículo 7.5 de la Ley Orgánica 15/1999 y, al propio tiempo, permitir que el texto pueda cubrir todos los supuestos de infracción que pudieran constar en los documentos presentados por los interesados.